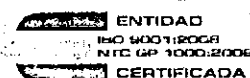




PROSPERIDAD
PARA TODOS



RESOLUCIÓN NÚMERO 192 DE 2013

(24 de junio de 2013)

"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 830064518-9"

EL DIRECTOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA

En ejercicio de sus facultades legales y en especial las conferidas por el Decreto 087 de 2011, y

CONSIDERANDO

Que mediante Resolución número 000452 del 17 de agosto de 2000, se concedió habilitación como empresa de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor en la modalidad de Carga a la sociedad denominada PROGRESAR TRANSPORTES LTDA.

Que mediante radicado número 2011873-052280-2 del 25 de octubre de 2011, el señor Henry Van Der Linde Peroso, Representante Legal de la empresa Parko Services S.A., presentó a la Dirección Territorial Cundinamarca solicitud en los siguientes términos "(...) solicitar se acepte la cesión que a favor de PARKO SERVICES S.A. ha efectuado la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA. de la habilitación como empresa pública terrestre automotor en la modalidad de carga, contenida en la Resolución 000452 de fecha 17 de agosto de 2000.

(...)

Adjunta certificados originales de Cámara de Comercio de las empresas PARKO SERVICES S.A. y PROGRESAR TRANSPORTES LTDA."

Que en la página uno (1) el Certificado de Existencia y Representación número RO30320616 del 24 de enero de 2011 de la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., identificada con NIT 830064518-9 se certifica: "Matrícula No: 00979465 cancelada el 31 de enero de 2003

Que la Escritura Pública No. 5624 del 20 de diciembre de 2002 de la Notaria 21 de Bogotá D.C., por medio de la cual se disolvió y liquidó la sociedad de la referencia, fue inscrita el 31 de enero de 2003 bajo el No. 864372 del Libro IX.

Que, en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en la Cámara de Comercio de Bogotá, la Sociedad se encuentra Liquidada."

Que mediante radicado 20118710068851 del 15 de diciembre de 2011, la Dirección Territorial Cundinamarca dio respuesta a la empresa Parko Services S.A. así: "(...) El artículo 133 del Decreto 266 de 2000, modificó el artículo 13 de la Ley 336 de 1996, que a la letra dice:

"ARTICULO 133. APLICACION DE LAS NORMAS DE DERECHO PRIVADO.
"Artículo 13. A la habilitación, así como a todos los actos de comercio de las empresas de servicio de

#

"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

transporte público, así como los que ejerzan sus asociados o socios, se regirán exclusivamente por las reglas de derecho privado salvo que la Constitución o la ley dispongan lo contrario.

Cuando de la realización de dichos actos o por causa de muerte, resulte que la actividad transportadora se desarrollaría por persona distinta a la que inicialmente le fue concedida la habilitación, y/ o la autorización para la prestación del servicio público de transporte, la nueva persona deberá obtener la habilitación y/ o la respectiva autorización para la prestación del servicio de acuerdo con la reglamentación que para el efecto expida el Gobierno nacional".

A la luz de la norma transcrita es claro entonces, que no es viable aceptar la cesión de la habilitación que mediante resolución número 000452 del 17 de agosto de 2000, la Dirección Territorial Cundinamarca, concedió a la sociedad PROGRESAR TRANSPORTES LTDA, como empresa de transporte público terrestre automotor en la modalidad de carga. La compañía PARKO SERVICES S.A., deberá solicitar la habilitación como empresa de transporte de carga, atendiendo lo dispuesto en el Decreto 173 de 2001.

Teniendo en cuenta que según Certificado de Existencia y Representación Legal del 24 de enero de 2011, expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá (anexo con su solicitud), la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA canceló su matrícula el 31 de enero de 2003 y certifica además que la Escritura Pública No. 5624 del 20 de diciembre de 2002 de la Notaría 21 de Bogotá D.C. por medio de la cual se disolvió y se liquidó la sociedad comercial denominada PROGRESAR TRANSPORTES LTDA, fue inscrita el 31 de enero de 2003 bajo el número 864372 del libro IX y, en consecuencia, conforme a los registros que aparecen en la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad se encuentra liquidada, esta Dirección Territorial remitirá a la Superintendencia de Puertos y Transporte la documentación aportada por usted, con el fin de adelantar los trámites pertinentes para la cancelación de la habilitación de la empresa antes mencionada.

Finalmente es importante recordar lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 173 de 2001: *"EMPRESAS NUEVAS.- Ninguna empresa nueva podrá entrar a prestar el servicio hasta tanto la Autoridad de transporte competente le otorgue la habilitación correspondiente. Cuando las autoridades de control y vigilancia constaten la prestación del servicio sin autorización, ésta se le negará y no podrá presentar una nueva solicitud de habilitación antes de doce (12) meses."*

Que la Dirección Territorial Cundinamarca con oficio 20118710069271 del 16 de diciembre de 2011, remitió a la Superintendencia de Puertos y Transporte por considerarlo de su competencia, la documentación necesaria para de ser procedente se cancelara la habilitación como empresa prestadora del servicio de transporte terrestre automotor de carga a Progresar Transportes LTDA.

Que la Dirección Cundinamarca, atendiendo lo dispuesto posteriormente para casos similares por el Superintendente Delegado de Tránsito y Transporte Terrestre Automotor de la Superintendencia de Puertos y Transporte, solicita a la referida Entidad devolver los documentos a este Despacho para dentro de nuestras competencias adelantar las medidas necesarias y resolver la situación de habilitación, teniendo en cuenta que la persona jurídica ya no existe.

Que la Superintendencia de Puertos y Transporte mediante radicado 2012873014056-2 del 31 de mayo de 2012, hizo devolución de los documentos solicitados.

47

"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

Que verificadas las bases de datos del sistema de control de manifiestos de carga a fecha 17 de junio de 2013 se evidencia **"NO APARCE INFORMACIÓN REPORTADA"** lo que indica que la empresa no ha reportado consumos de manifiestos de carga.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

En el caso bajo examen es necesario entrar a determinar, frente a los requerimientos contemplados en el artículo 13 del Decreto 173 de 2001 para la expedición de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000, por la cual se otorgó a la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., la habilitación como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor en la modalidad de carga y la aplicación del artículo 15 del Decreto 173 de 2001, que prevé: *"Sin perjuicio de las disposiciones legales contenidas en el régimen sancionatorio, la habilitación será indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento."* *negrilla fuera de texto*, aspectos relacionados con la validez y eficacia de ese acto administrativo, toda vez que el objeto para el cual se expidió, está directamente relacionado con la prestación del servicio público del transporte de carga.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 1524 del Código Civil, "No puede haber obligación sin una causa real y lícita", es decir, que entendida la actividad del servicio público del transporte, por parte de la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., como la condición o causa dentro de la eficacia del Acto Jurídico y al no realizarse dicha actividad o al desaparecer dicha causa, se extinguen los efectos de la misma. La validez de un acto administrativo es el resultado de la perfecta adecuación, sumisión y cumplimiento de los requisitos preestablecidos en una norma superior, es decir, el acto administrativo es válido en la medida que se adecue a las exigencias del ordenamiento jurídico.

La validez del acto administrativo resulta entonces, desde esta óptica, como un fenómeno de contenidos y exigencias del derecho para la estructuración de la decisión administrativa.¹

La eficacia, por su parte, es una consecuencia del acto administrativo que lo hace capaz de producir los efectos jurídicos para los cuales se expidió. La eficacia, a diferencia de la validez, se proyecta al exterior del acto administrativo en búsqueda de sus objetivos y logro de sus finalidades.²

No obstante lo anterior, una vez expedido el acto administrativo pueden presentarse fenómenos que alteren su normal eficacia, estos fenómenos son conocidos dentro de nuestra legislación como eventos de pérdida de fuerza ejecutoria, recogidos por el artículo 66 del Código Contencioso Administrativo, según el cual:

¹ Santofimio Jaime Orlando, Tratado Derecho Administrativo, Universidad Externando de Colombia Pág. 294.

² Idib 1



"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

"Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo, pero perderán su fuerza ejecutoria en los siguientes casos:

1. Por suspensión provisional.
2. Cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho.
3. Cuando al cabo de cinco (5) años de estar en firme, la administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos.
4. Cuando se cumpla la condición resolutoria a que se encuentre sometido el acto.
5. Cuando pierda su vigencia".

Bajo el nombre genérico de pérdida de fuerza ejecutoria, el Código Contencioso Administrativo recoge lo que la doctrina administrativa denomina en algunas oportunidades, como fenómenos de extinción de los efectos de los actos administrativos. Eventos que no son otra cosa que alteraciones a la normal eficacia del Acto Administrativo.

En relación con la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por el desaparecimiento de sus fundamentos de hecho o de derecho, se presenta el fenómeno jurídico denominado por la doctrina como el decaimiento del acto administrativo por causas imputables a sus mismos elementos, en razón a causas posteriores, no relacionadas directamente la validez inicial del acto. El decaimiento del acto en el derecho colombiano está en íntima relación con la motivación del acto, se configura por la desaparición de los elementos integrantes del concepto motivante del acto.³

El artículo 66 del C.C.A. al instituir el llamado decaimiento del Acto Administrativo dentro del concepto genérico de pérdida de fuerza ejecutoria, desarrolla una limitante expresa al mundo de la eficacia del acto, para lo cual es necesario analizar la causal 2ª de dicho artículo relacionada con la desaparición de los fundamentos fácticos o jurídicos que le han servido de base a la decisión, en sentencia del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo de agosto 1 de 1991, esa Corporación se pronunció frente a la pérdida de fuerza ejecutoria en relación con un acto general y frente a un acto particular así:

"(...)De acuerdo con lo anterior, el legislador colombiano ha establecido expresamente: Primero, que el Acto Administrativo – sin hacer distinción entre el general y el particular, o concreto –, salvo norma expresa en contrario, pierde su fuerza ejecutoria, entre otros casos cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho y, segundo, cuando por sentencia ejecutoriada se declare la nulidad de una ordenanza o de acuerdo intendencial, comisarial, distrital o municipal, en todo o en parte quedarán sin efecto en lo pertinente los decretos reglamentarios"

El artículo 66 citado superó el examen de constitucionalidad de que fue objeto, a través de la Sentencia C-069 de 1995 ⁴, según la cual:

³ Ibid 1 y 2 pág. 318

⁴ Corte Constitucional, Sentencia C-069 de 1995, MP Hernando Herrera Vergara.

4

"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

"Los actos administrativos, por regla general, son obligatorios mientras no hayan sido suspendidos o declarados nulos por la jurisdicción contencioso administrativa. Por ello la norma demandada comienza por señalar que "Salvo norma expresa en contrario, los actos administrativos serán obligatorios mientras no hayan sido anulados o suspendidos por la jurisdicción en lo contencioso administrativo". La pérdida de fuerza ejecutoria de los actos administrativos, ocurre de manera excepcional, de conformidad con las causales establecidas por la ley, y en particular por el artículo 66 del Decreto 01 de 1984, parcialmente acusado.


De esta manera, el citado precepto consagra por una parte la obligatoriedad de los actos administrativos como regla general "salvo norma expresa en contrario", y como excepciones la pérdida de fuerza ejecutoria, por suspensión provisional, por desaparición de sus fundamentos de hecho o de derecho, eventos denominados por la jurisprudencia y la doctrina, el decaimiento del acto administrativo; por el transcurso del tiempo, es decir cuando al cabo de cinco años de estar en firme, la Administración no ha realizado los actos que le correspondan para ejecutarlos; por cumplimiento de la condición resolutoria a que esté sometido; y cuando pierdan su vigencia (vencimiento del plazo)".

La misma sentencia al ocuparse de la causal establecida en el numeral 2° del artículo 66° señala que:

"(...) En cuanto hace relación al numeral 2° sobre pérdida de la fuerza ejecutoria del acto administrativo "cuando desaparezcan sus fundamentos de hecho o de derecho", igualmente demandado, es decir, cuando ya no existen las circunstancias de modo, tiempo y lugar que le sirvieron de base, o cuando las normas jurídicas sobre las cuales se fundaba, han desaparecido del ordenamiento jurídico, debe observarse en primer término, que esta causal en nada contraría el artículo 238 de la Constitución Política, pues este precepto se refiere a un tema completamente distinto, como lo es el de la suspensión provisional por parte de la jurisdicción contencioso administrativa con respecto a los actos de la administración.

Tampoco riñe con los artículos 189 y 209 de la Carta Política, invocados en la demanda, por cuanto dichos preceptos versan sobre la potestad reglamentaria del Presidente de la República para la expedición de decretos, resoluciones y órdenes necesarias para la cumplida ejecución de las leyes, y a la función administrativa encaminada a orientar la actividad administrativa para la observancia de los fines del Estado.

Lejos de contrariar las normas constitucionales en que se apoya la demanda, la Administración Pública tiene un control interno que se ejerce en los términos que señale la ley, de manera que el legislador está facultado por la Constitución (artículo 209) para consagrar causales excepcionales a través de las cuales la misma Administración puede hacer cesar los efectos de los actos administrativos, como ocurre cuando desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho del mismo acto administrativo, sin que haya lugar a que al erigirse ésta pueda desprenderse quebrantamiento constitucional alguno, lo que da

A 

"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

lugar a considerar que el cargo mencionado no está llamado a prosperar".
(Subraya y negrilla fuera del texto original)

Concluye la Corte en relación con el cumplimiento de la función administrativa así:

"De otro lado, la Sala comparte el concepto suscrito por el Señor Procurador General de la Nación cuando expresa que la administración no cumpliría con los fines que le corresponden dentro de la función administrativa en beneficio de los intereses generales" *"cuando advertida objetivamente la causa por la cual el acto se ha tornado ineficaz, debiera esta acudir necesariamente e ineludiblemente, en espera de una decisión que no precisa de debate judicial alguno"... "piénsese solamente en el caso que se generaría si la administración debiera esperar que la jurisdicción contencioso administrativa decidiera, en el clásico ejemplo del tratadista Sayagues Laso, sobre el nombramiento de un funcionario que requiere necesariamente la calidad de ciudadano y con posterioridad a su nombramiento éste la pierde, caso en el cual la administración se limita a constatar que ha operado la desinvestidura sin requerir del largo ritual de un proceso contencioso administrativo."*

A su vez el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, en el concepto 1491 de junio 12 de 2003, Magistrado Ponente Cesar Hoyos Salazar manifestó:

"El decaimiento del acto administrativo consiste en la pérdida de fuerza ejecutoria de éste, el cual, aunque válido, pierde su obligatoriedad en razón a que han desaparecido los supuestos de hecho o de derecho en los cuales se fundamentó, como cuando se produce la derogatoria expresa - tácita o la declaratoria de inexecuibilidad o nulidad de las normas que le sirvieron de base. (...) el decaimiento del acto administrativo significa que éste deviene ineficaz por cuanto los factores de hecho o las normas que existían al momento de su expedición y por ende le sirvieron de fundamento, ya no subsisten".

En materia de transporte, los actos administrativos que autorizan la ejecución de una actividad, tienen en cada caso una naturaleza especial, que sujeta al beneficiario al cumplimiento de una serie de obligaciones que tienen una relación directa con la ejecución de tales actividades, siendo para este caso la prestación del servicio de transporte público de carga.

Así las cosas la obtención de la habilitación adquiere unas especiales características, cuyo interés, desde el punto de vista Administrativo, no se agota con su otorgamiento, sino que se mantienen a lo largo de la vida útil de la empresa que su objeto social es prestar el servicio de transporte público de carga.

En el caso que nos ocupa, la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., solicitó a este Ministerio, la habilitación para prestar el servicio público de transporte de carga, frente a lo que este Ministerio profirió la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000.

Con posterioridad a la entrada en vigencia del acto administrativo que concedió la habilitación, la Dirección Territorial Cundinamarca conoció a través de la

#

"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

comunicación enviada por el señor Henry Van Der Linde Peroso, Representante Legal de la empresa Parko Services S.A., que las condiciones del otorgamiento de la habilitación habían cambiado por cuanto adjuntó Certificado de Existencia y Representación Legal de la empresa PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., en el que certifica que la Matrícula No. 00979465 fue cancelada el 31 de enero de 2003 y *"Que la Escritura Pública No. 5624 del 20 de diciembre de 2002 de la Notaria 21 de Bogotá D.C., por medio de la cual se disolvió y liquidó la sociedad de la referencia, fue inscrita el 31 de enero de 2003 bajo el No. 864372 del Libro IX.*

Que, en consecuencia, y conforme a los registros que aparecen en la Cámara de Comercio de Bogotá, la Sociedad se encuentra Liquidada."

Además se verificó en la página electrónica del Ministerio de Transporte sobre el reporte de consumos de manifiestos de carga efectuados, encontrándose *"NO APARCE INFORMACIÓN REPORTADA"* lo que indica que no ha cumplido con esta obligación.

En relación con lo anterior, se encuentra la Administración frente a un acto administrativo cuyos efectos jurídicos no se seguirán generando, desvirtuando la naturaleza del mismo cuyo fin primordial es precisamente producirlos, tornándose ineficaz desde todo punto de vista. Configurándose de esta forma el fenómeno jurídico del decaimiento del acto administrativo, según el cual un acto producido válidamente puede llegar a perder fuerza en el ámbito de la eficacia al desaparecer sus fundamentos de hecho o de derecho por causas imputables a sus mismos elementos, en razón a circunstancias posteriores, más no directamente relacionadas con la validez inicial del acto.

Así las cosas y teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 15 del Decreto 173 de 2001 *"la habilitación será indefinida mientras subsistan las condiciones exigidas y acreditadas para su otorgamiento y las motivaciones de la Sentencia C-069 de 1995 antes citada, según la cual: ..."la misma Administración puede hacer cesar los efectos de los actos administrativos, como ocurre cuando desaparecen los fundamentos de hecho o de derecho del mismo acto administrativo"*, se procederá en la parte resolutive del presente acto a declarar la pérdida de la fuerza ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000.

En mérito de lo expuesto, este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO.- Declarar la pérdida de la fuerza ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000, por la cual la Dirección Territorial Cundinamarca del Ministerio de Transporte, concedió habilitación como empresa de Transporte Público Terrestre Automotor en la modalidad de carga a la Sociedad PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., con NIT 830064518-9, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente resolución.



"Por la cual se declara la pérdida de la Fuerza Ejecutoria de la Resolución 000452 del 17 de agosto de 2000 que concedió habilitación a la empresa Progresar Transportes Ltda., NIT 8300645189 "

ARTICULO SEGUNDO.- Notificar el contenido de esta resolución al Gerente de la empresa: PROGRESAR TRANSPORTES LTDA., (Carrera 24 No. 24 A-40 Bogotá) de conformidad con lo dispuesto en los artículos 44 y 45, haciéndole saber que contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición ante esta Dirección Territorial Cundinamarca y apelación ante la Dirección de Transporte y Tránsito, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 50 y 51 del Código Contencioso Administrativo.

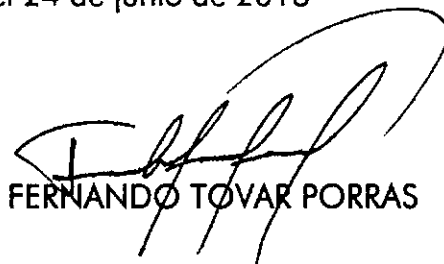
ARTÍCULO TERCERO.- Publicar en la página web del Ministerio de Transporte el presente acto administrativo.

ARTÍCULO CUARTO.- Enviar copia de este acto administrativo a la Superintendencia de Puertos y Transporte y al Grupo de Investigación y Desarrollo en Transporte, Tránsito y Seguridad Vial, para lo de su respectiva competencia.



ARTÍCULO QUINTO.- El presente acto administrativo rige a partir de la fecha de su ejecutoria.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá, D. C., el 24 de junio de 2013



FERNANDO TOVAR PORRAS

Proyectó: Myriam Rozo R., 
Revisó: Emilce León 
Fecha: 17 de junio de 2013,
Radicados: 2012-873-014056-2